



AL SERVICIO DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ SOCIAL

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ARTURO GUERRA HIGUITA

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,
SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL.**

Medellín, nueve de septiembre de dos mil veintiuno.

PROCESO: Verbal (Responsabilidad Civil Extracontractual)

DEMANDANTES: Oscar Humberto Cárdenas Gómez y
otros.

DEMANDADAS: Suministros de Colombia S.A y otras.

PROCEDENCIA: Juzgado 3° Civil del Circuito de Envigado.

C.U.D.R.: 05266 31 03 002 **2013 00520 01**

RADICADO INTERNO: 093-16

PROVIDENCIA: S.S. 017/21

TEMA: En la responsabilidad civil extracontractual el afectado debe acreditar no sólo el hecho dañoso, sino además el nexo causal y los perjuicios que le fueron causados con éste y el monto de los mismos.
CONFIRMA.

Conoce la Sala de la APELACIÓN interpuesta por la parte demandante,
frente a la sentencia proferida por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL

CIRCUITO DE ENVIGADO, dentro del proceso VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, instaurado por el señor OSCAR HUMBERTO CÁRDENAS GÓMEZ, en nombre propio y en el de sus hijos JHON ANDERSON CÁRDENAS ACEVEDO y CAMILA CÁRDENAS ACEVEDO; SANDRA MILENA ACEVEDO HOYOS, MARÍA REGINA GÓMEZ DE CÁRDENAS, MARIA OLGA HOYOS LOPEZ, SAÚL ACEVEDO ARIAS, NORA ASTRID CÁRDENAS GÓMEZ, VILMA DEL SOCORRO CÁRDENAS GÓMEZ, CARLO MARIO CÁRDENAS GÓMEZ, LUIS FERNANDO CÁRDENAS GÓMEZ, LILIANA CÁRDENAS GÓMEZ, CLARA INÉS CÁRDENAS GÓMEZ, NORMA CECILIA CÁRDENAS GÓMEZ y JULIÁN HORACIO CÁRDENAS GÓMEZ; en contra de SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. (SUMICOL), MINERALES INDUSTRIALES S.A, y ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS S.A., al que se vinculó a LEONARDO FABIO MEJÍA LOPEZ como llamado en garantía, la cual se procede a desatar en los siguientes términos:

1.0. ANTECEDENTES.

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

A través de apoderado legalmente constituido, los demandantes incoaron demanda de responsabilidad civil extracontractual, cuyos hechos se resumieron así: (Fol. 1 a 18, Cdno. Ppal.)

El 16 de junio de 2007, los señores OSCAR HUMBERTO CÁRDENAS GÓMEZ y SANDRA MILENA ACEVEDO HOYOS, se movilizaban en motocicleta con placas EIV-61B, por la vía que conecta al municipio de Sonsón con la Unión, cuando perdieron el control del vehículo debido a la presencia de material tipo caolín en la vía, derramado por las volquetas al servicio de las sociedades demandadas, lo que hizo que se deslizaran hacia el carril contrario, por el cual venía otro carro, conducido por LEONARDO FABIO MEJÍA LOPEZ, quedando OSCAR HUMBERTO debajo de este vehículo. De acuerdo con la resolución 229 de agosto de 2007, proferida por la Inspección Municipal de Policía y Tránsito de la Unión, el accidente fue causado por *“la presencia de residuos de material suelto (barro) haciendo que la vía se tornara resbaladiza y precipitosa”*.

Como consecuencia del accidente el señor OSCAR HUMBERTO CÁRDENAS GÓMEZ, quien antes del accidente se encontraba en buen estado de salud, sufrió amputación de extremidad inferior izquierda a la altura de 10 centímetros arriba de la rodilla, ruptura de tobillo derecho, ruptura de ligamentos de rodilla derecha, y graves daños psicológicos, teniendo una pérdida de capacidad laboral del 32.95%; luego de la rehabilitación inicial se le diagnosticó trombosis venosa profunda en el muñón, que generó un tromboembolismo pulmonar agudo como consecuencia de la amputación. Por ello, su profesión de docente del área de mecánica automotriz en la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio Álvarez Restrepo en el municipio de Sonsón, en la que devengaba un sueldo de \$791.771, más prestaciones sociales, se vio afectada.

Por su parte, SANDRA MILENA ACEVEDO HOYOS sufrió fractura de fémur izquierdo y laceraciones y cicatrices en su cuerpo, que disminuyeron su capacidad de moverse, así como su capacidad laboral, pues antes del accidente trabajaba en la papelería Carlo Magno del municipio de Sonsón recibiendo un salario de \$20.000 diarios. Adicionalmente, sufrió profundos daños morales y a la vida en relación como consecuencia de sus lesiones y las de su cónyuge.

Del mismo modo, la familia de las víctimas directas también sufrió perjuicios a consecuencia del accidente: sus hijos menores JHON ANDERSON CÁRDENAS ACEVEDO y CAMILA CÁRDENAS ACEVEDO, vieron limitadas sus interacciones lúdicas con sus padres debido a las consecuencias físicas y psicológicas producidas por el accidente; el resto del grupo familiar, compuesto por la madre y los 11 hermanos de OSCAR HUMBERTO CÁRDENAS GÓMEZ, así como por los padres de SANDRA MILENA ACEVEDO HOYOS, sufrieron daños morales ocasionados por el grave estado de salud de sus familiares y la afectación en el estado anímico y emocional que repercutió en la esfera familiar.

Se señaló como responsables del accidente a las empresas demandadas, SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. (SUMICOL) y MINERALES INDUSTRIALES S.A., subordinadas y subsidiarias de la matriz ORGANIZACIÓN CORONA, quienes para el 16 de junio de 2007, tenían contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual con ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS S.A., y tenían por objeto social,

entre otros, la fabricación de yeso, cal, cemento, y la extracción de arcillas de uso industrial, para lo cual contaban con canteras para la extracción de arcillas y caolín ubicadas en el municipio de la Unión. Luego de extraer el material de aquellas minas, este era transportado a las plantas procesadoras de la vereda Altavista del municipio de la Unión, a través de volquetas destapadas que derramaban material en la vía pública, tanto así, que CORNARE les habían realizado varios requerimientos para que tomaran medidas para cesar dicha circunstancia.

Fincados en los hechos narrados, los demandantes solicitaron que se declarase a las demandadas civil y solidariamente responsables de los perjuicios materiales e inmateriales que les habían ocasionado, y que en consecuencia debían pagar las siguientes sumas:

➤ Por daños morales, un total de 725 SMLMV, de la siguiente manera:

- Para OSCAR HUMBERTO CÁRDENAS GÓMEZ, víctima, la suma de 200 SMLMV.
- Para SANDRA MILENA ACEVEDO HOYOS, víctima, la suma de 100 SMLMV.
- Para JHON ANDERSON CÁRDENAS ACEVEDO, hijo de las víctimas, la suma de 50 SMLMV.
- Para CAMILA CÁRDENAS ACEVEDO, hija de las víctimas, la suma de 50 SMLMV.
- Para MARÍA REGINA GÓMEZ DE CÁRDENAS, madre de la víctima, la suma de 50 SMLMV.

- Para NORA ASTRID CÁRDENAS GÓMEZ, hermana de la víctima, la suma de 25 SMLMV.
- Para VILMA DEL SOCORRO CÁRDENAS GÓMEZ, hermana de la víctima, la suma de 25 SMLMV.
- Para CARLOS MARIO CÁRDENAS GÓMEZ, hermano de la víctima, la suma de 25 SMLMV.
- Para LUIS FERNANDO CÁRDENAS GÓMEZ, hermano de la víctima, la suma de 25 SMLMV.
- Para LILIANA CÁRDENAS GÓMEZ, hermana de la víctima, la suma de 25 SMLMV.
- Para CLARA INÉS CÁRDENAS GÓMEZ, hermana de la víctima, la suma de 25 SMLMV.
- Para NORMA LUCÍA CÁRDENAS GÓMEZ, hermana de la víctima, la suma de 25 SMLMV.
- Para JULIÁN HORACIO CÁRDENAS GÓMEZ, hermano de la víctima, la suma de 25 SMLMV.
- Para MARIA OLGA HOYOS LOPEZ, madre de la víctima, la suma de 25 SMLMV.
- Para SAÚL ACEVEDO ARIAS, padre de la víctima, la suma de 25 SMLMV.

➤ Por concepto de daños fisiológicos, debían pagar los siguientes valores:

- Para OSCAR HUMBERTO CÁRDENAS GÓMEZ, la suma de 300 SMLMV

- Para SANDRA MILENA ACEVEDO HOYOS, la suma de 100 SMLMV.
- Por daños materiales, se debía pagar al señor OSCAR HUMBERTO CÁRDENAS GÓMEZ un valor de \$90.952.145, así:
 - Por concepto de lucro cesante consolidado, la suma de \$30.785.939.
 - Por concepto de lucro cesante futuro, la suma de \$60.166.206.

1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La parte opositora, SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. (SUMICOL) y MINERALES INDUSTRIALES S.A., replicó a través de apoderada, oponiéndose a todas las pretensiones y pronunciándose frente los hechos de la siguiente manera: (Fol. 251 a 263, Cdno. Ppal.)

Manifestó que no le constaba lo dicho en la demanda sobre el estado de salud de los demandantes ni sobre su ocupación para el año 2007, pero expuso que SANDRA MILENA ACEVEDO HOYOS había señalado durante el trámite ante el inspector de Tránsito y Policía del Municipio de la Unión, que era ama de casa; del mismo modo, indicó que no le constaba lo dicho en la demanda sobre la conformación del grupo familiar y sobre el domicilio, lo que debía ser probado.

Aceptó, que las sociedades demandadas eran subsidiarias y subordinadas de la matriz ORGANIZACIÓN CORONA, y que su objeto social era la fabricación de yeso y arcillas de uso industrial, mas no de cal y cemento, expresando que para el desarrollo de tal objeto tenían canteras para la extracción de arcillas y caolín en los sitios señalados en la demanda. Sin embargo, expuso que no era cierto que las demandadas hubiesen derramado caolín en la vía, pues aquellas tenían parámetros de seguridad para las volquetas, las cuales debían estar carpadas y tener las compuertas cerradas con una palanca de cerramiento absolutamente segura; y desde antes del 2007 tenían controles operacionales para verificar el sellamiento de los vehículos y el lavado de sus llantas cuando salían de las minas o de la planta, por lo que aquel hecho se debía acreditar.

Agregó, que existían empresas, diferentes a las accionadas, que tenían concesiones mineras en el municipio de la Unión, y que se dedicaban a la explotación de caolín, teniéndose que desplazar por la misma vía donde ocurrió el accidente; además, aquel municipio era eminentemente agrícola, por lo que diferentes tipos de vehículos salían de carreteras veredales hacia la vía con las llantas sucias y derramando distintos materiales sobre la misma.

Expuso, que CORNARE había requerido a varias empresas y no solo a las demandadas, y aunque la corporación no había señalado a las accionadas como responsables de los derrames de material en la vía, de todos modos, aquellas habían desarrollado políticas de seguridad siguiendo el principio de responsabilidad social de acuerdo a su misión y su visión.

Afirmó que no les constaban, y debían ser probados, los hechos referentes al accidente de tránsito al cual se aludió en la demanda, ni tampoco lo referente a la magnitud del daño que los demandantes dijeron haber sufrido como consecuencia de aquel.

Expuso, que era cierto lo dicho frente al fallo de tránsito, pero que dicha decisión se había proferido con base en las declaraciones, carentes de imparcialidad, de los conductores implicados en el accidente y de la cónyuge de uno de ellos, trasladando la causa a las demandadas.

Finalmente, aceptó que era cierto que, para el 16 de mayo de 2007, las demandadas tenían seguro de responsabilidad civil extracontractual con ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS S.A., y que se haría el respectivo llamamiento en garantía.

Fincada en los hechos antes narrados, propuso las excepciones que motejó como: (Fols 255 a 260, Cdno Ppal)

“INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL”. Porque las accionadas no habían desplegado ninguna conducta que las convirtiera en responsables de los hechos ocurridos; y se debía probar que el material arcilloso que causó el accidente fue derramado por ellas.

Mencionó que, si bien podía existir el daño, este no había sido causado por las demandadas, pues existía una causa extraña que desvirtuaba el

nexo causal, en la modalidad de la culpa de la víctima directa y el hecho de un tercero.

“HECHO DE UN TERCERO”. Pues en su sentir, el hecho ilícito fue producto del actuar imprudente de LEONARDO FABIO MEJÍA, por lo que habría una causa extraña que exoneraba de responsabilidad a las empresas demandadas, al ser un evento irresistible y ajeno a ellas.

“CULPA DE LA VICTTIMA”. Toda vez que el señor OSCAR HUMBERTO CÁRDENAS GÓMEZ, no conducía la moto con la pericia requerida para el caso, y tampoco cumplía las normas de tránsito; los hechos parecían indicar que ambos vehículos se desplazaban a velocidades superiores a las permitidas, de lo que se infería que el accidente se dio por el exceso de velocidad del conductor o por la falta de impericia de este para conducir su vehículo, más no por la presencia de un elemento deslizante en el pavimento.

“REDUCCIÓN DEL MONTO INDEMNIZABLE”. Si dentro del proceso se demostraba que hubo aporte causal de la víctima en la producción del daño, según el artículo 2357 del C.C, se debía reducir el monto a indemnizar.

“INDEBIDA Y EXAGERADA TASACIÓN DE LOS PERJUICIOS ADUCIDOS”. Los demandantes pretendían una reparación exagerada, desconociendo los equilibrios indemnizatorios de la reparación integral. Los perjuicios extrapatrimoniales no tenían soporte alguno, y se encontraban desenfocados y fuera de la realidad, alejándose de la entidad

del daño sufrido y de los parámetros de la Corte Suprema de Justicia; además, no había prueba de los perjuicios materiales aducidos por los demandantes, evidenciándose el ánimo lucrativo de aquellos por cuanto SANDRA MILENA, quien en el trámite administrativo afirmó ser ama de casa, dijo en la demanda que trabajaba en la papelería Carlo Magno situada en Sonsón.

1.3. DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

En forma oportuna, la parte demandada llamó en garantía al señor LEONARDO FABIO MEJÍA, con fundamento en los artículos 57 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por cuanto fue él quien ocasionó los perjuicios al señor OSCAR HUMBERTO CÁRDENAS GÓMEZ por el ejercicio de una actividad peligrosa. (Fols 6 a 8, Cdno 3).

Luego de realizarse el emplazamiento del llamado en garantía y de nombrársele curadora para que lo representara en el proceso, esta se pronunció, señalando que no le constaban los hechos de la demanda e indicando que no se debía declarar como responsable al señor LEONARDO FABIO MEJÍA, puesto que este ya había sido exonerado de responsabilidad durante el procedimiento administrativo, a través de la Resolución N° 229 del ocho de agosto de 2007.

Del mismo modo, la parte demandada llamó en garantía a la sociedad ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A., indicando que ORGANIZACIÓN CORONA S.A. había contratado la póliza No.

20234 de responsabilidad civil extracontractual, con vigencia del uno de noviembre de 2006 al uno de octubre de 2007, por la suma asegurada de \$11.542.40.000. Que los hechos originados en la demanda habían ocurrido durante la vigencia de dicha póliza, motivo por el cual el cumplimiento de la eventual sentencia condenatoria a ORGANIZACIÓN CORONA S.A, le correspondía a aquella aseguradora de manera directa o a través de reembolso. (Fols 28 a 30, Cdno 2).

Una vez notificada la llamada en garantía, ésta se pronunció, oponiéndose a todas las pretensiones, e indicando que era cierto la existencia de la póliza de responsabilidad civil, aclarando que no era cierto que aquella cubriera la responsabilidad civil extracontractual, pero que se atenían a las condiciones generales y particulares del contrato suscrito. Así mismo, arguyó que no le constaban los hechos de la demanda, y que para que surgiera la obligación indemnizatoria se requería el análisis temporal, la condena de responsabilidad al asegurado, y que existiese la cobertura del evento, señalando que, de condenarse al asegurado, la aseguradora le rembolsaría lo que pagara con ocasión a la sentencia, de acuerdo a la póliza, sin que hubiese lugar al pago directo a los demandantes, pues entre ella y estos no había relación jurídico procesal.

La llamada en garantía propuso las siguientes excepciones: (Fols 4 a 9, Cdno 2)

“AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SUMICOL S.A. Y MINERALES INDUSTRIALES S.A.”. No había prueba de que las demandadas hubiesen desplegado alguna conducta que las hiciese

responsable de los perjuicios causados a los demandantes; en cambio, los perjuicios fueron resultado de la imprudencia de la víctima en conjunción con el hecho de un tercero, y en consecuencia, tampoco se podía predicar la existencia de un nexo causal, toda vez que las accionadas no eran las encargadas del transporte de los productos y estas verificaban que no hubiese derrames de las volquetas que los transportaban, sumado a que no eran las únicas empresas con concesiones mineras en el lugar, y dado que por la vía transitaban vehículos agrícolas que dejaban residuos.

“CULPA DE LA VICTIMA DIRECTA”. La conducta imprudente del conductor fue suficiente para que se presentara el resultado dañoso, pues aquel, conociendo la carretera y sabiendo que debía extremar las precauciones para evitar accidentes, no redujo la velocidad conforme lo exigía la norma e invadió el carril contrario, por lo que este hecho de la víctima, imprevisible e irresistible para las demandadas, fue el que ocasionó exclusivamente el daño.

“HECHO DE TERCEROS”. Los perjuicios fueron ocasionados por LEONARDO FABIO MEJÍA, conductor del vehículo que colisionó con la motocicleta manejada por OSCAR HUMBERTO CÁRDENAS GÓMEZ. De esta manera, el hecho dañoso era irresistible e imprevisible para las sociedades demandadas, externo y ajeno jurídicamente a ellas, de suerte que no se podía deducírseles responsabilidad alguna. Así mismo, en el sector existían otras concesiones mineras que explotaban caolín y personas que ejercían la agricultura, que transitaban por la carreteo donde ocurrió el accidente.

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR”. Por cuanto el resultado dañoso no le era atribuible a las demandadas, sino que se dio a consecuencia del hecho de la víctima directa y el de un tercero, por lo que no se configuraban los elementos esenciales de la responsabilidad.

“INDEBIDA Y EXAGERADA TASACIÓN DE LOS PERJUICIOS ADUCIDOS”. Se debía probar la existencia, entidad e intensidad real del daño extrapatrimonial causado a los demandantes, apartándose de las exageradas cuantías solicitadas por ellos, que no iban acorde a los parámetros de la Corte Suprema de Justicia ni del Consejo de Estado. Así mismo, se debía acreditar la existencia y cuantía del lucro cesante del señor OSCAR HUMBERTO CÁRDENAS GÓMEZ.

“DEDUCCIÓN DE LOS VALORES INDEMNIZADOS POR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES”. El juez debía descontar de la indemnización, las prestaciones económicas y asistenciales pagadas por la administradora de riesgos profesionales a la que estaba afiliado la víctima directa al momento del accidente, dado que no podía acumularse dicha indemnización, al existir norma expresa que permitía a la A.R.P. el derecho de subrogación frente al tercero responsable.

1.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO profirió sentencia el cinco de septiembre de 2016, desestimando las

pretensiones de la parte demandante, y estimando la excepción *INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL* propuesta por la parte demandada. (Fols. 582 a 584, Cdno Ppal.)

Luego de hacer un recuento de los hechos narrados en la demanda, y tras verificar el cumplimiento de los presupuestos procesales, pasó el juzgador de primera instancia a determinar si se cumplían los elementos de la responsabilidad aducida.

Después de analizar el acervo probatorio, concluyó que no se demostró que el material que había en la vía el día del accidente fuese caolín, pues de las diferentes declaraciones y documentos allegados al proceso se podía evidenciar que, si bien en la zona había barro o arenilla, lo cierto era que no existía prueba de que se tratase de caolín, teniendo en cuenta que por aquella vía transitaban numerosos vehículos, varios de ellos dedicados a la actividad agrícola y minera. (Minuto 01:58:49 grabación en Cd.)

Aunado a lo anterior, indicó el *a quo*, que no había prueba de que el material presente en la vía hubiese sido dejado allí por las sociedades demandadas, máxime cuando los elementos de convicción permitían ver que por aquella carretera pasaban un sinnúmero de carros cada día, y que en la zona existían otras concesiones mineras, no solo de caolín sino de otros materiales, además de haberse demostrado que las demandadas tomaban precauciones para evitar derrames en la vía; sumado a esto las operaciones de minas ilegales que funcionaban en el sector.

De este modo, manifestó el juez, que no se logró demostrar la actividad peligrosa ni el nexo causal entre el hecho y los daños sufridos por las víctimas del accidente, pues si bien habían indicios de que las demandadas tenían plantas y minas de caolín y que transitaban por la carretera donde ocurrió el accidente, lo cierto era que se había demostrado que aquella vía no era privada, sino que era una vía departamental muy transitada por volquetas, y que el suelo de la Unión era rico en caolín, por lo cual los tractores agrícolas podían arrastrar este material a la vía, y debido a ello no era razonable concluir que las demandadas habían sido quienes habían derramado la sustancia.

Expuso que, no procedía tacha de testimonios solicitada por la parte demandante, ya que, aunque los declarantes trabajaban para las empresas demandadas, esta relación no era suficiente para desecharlos, teniendo en cuenta que conocían el funcionamiento de las empresas, de las vías y de las actividades económicas de la Unión, siendo concordantes con las demás pruebas.

1.4. DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante atacó la aludida decisión vía recurso de apelación, de manera oportuna, razón por la cual fue concedida por el *a quo* (Minuto 00:57:00, grabación en Cd).

Argumentó que se había presentado una violación de facto al debido proceso, en razón a que el juez, de mala fe, tomó las pruebas que le daban la razón a la parte demandada e ignoró las que soportaban la teoría del caso de la parte demandante. Fue así, como el *a quo* ignoró que el perito había afirmado que el material en la vía era caolín, e ignoró los testimonios que acreditaron que las volquetas de las demandadas transitaban continuamente por la vía; y tampoco tuvo en cuenta los documentos en los que CORNARE había requerido a las demandadas por sus derramamientos de caolín en la vía.

Expresó que el juez ignoró los testimonios que afirmaron haber visto a las volquetas de las empresas demandadas derramando material en la carretera, y en cambio decidió que, como el día anterior había llovido, el barro había sido arrastrado por camiones, sin haber pruebas que respaldaran tal afirmación, quedando esta en mera suposición.

Señaló, que de la teoría de la probabilidad fáctica se lograba inferir que la causa más probable del accidente la tenían las demandadas por ser las mayores explotadoras de caolín en la zona, y no se había probado el tránsito de otras empresas de igual magnitud por aquella vía, a pesar de que el juez lo tomara como un hecho cierto.

Adujo que la presencia de tractores sobre la vía y su incidencia en el ensuciamiento de esta no habían sido probada, pero el juez había tomado dichas afirmaciones como ciertas para favorecer su teoría, constituyendo una vía de hecho. Adicionalmente, había tomado una comunicación

interna entre abogado y cliente respecto a la contestación de la demanda como hecho confeso cuando este no había sido tal.

Así mismo, manifestó que no se había hecho un análisis objetivo de la tacha de los testigos de la parte demandada, los cuales no debían haber sido tenidos en cuenta porque no eran imparciales al tener un interés económico, subordinación y vínculo personal con las sociedades demandadas.

Por aquellos motivos, solicitó que se resolviese la alzada analizando los testimonios recibidos por despacho comisorio, los oficios de CORNARE, las declaraciones del comandante del cuerpo de bomberos, y la del perito, que arrojarían la existencia de la responsabilidad de las demandadas, conclusión a la que el juez no llegó por haber tomado únicamente la prueba que le favorecía a aquella parte.

El recurso de apelación fue admitido por auto del 20 de febrero de 2017, y, con fundamento en el Decreto 806 de 2020, se dio traslado para que el apelante sustentara el recurso interpuesto, luego, a la parte no recurrente.

Dentro del término otorgado, el apelante se ratificó en los argumentos presentados en la audiencia practicada ante el *a quo* el cinco de septiembre de 2016.

Manifestó que la sentencia apelada pretermitió la valoración, apreciación y asignación de valor probatorio de todos los medios de prueba como lo ordena el artículo 176 de la Ley 1564, pues desconoció el valor

probatorio de los testimonios solicitados por esa parte y practicados mediante despacho comisorio.

Refirió que en la sentencia de primer grado existió indebida valoración probatoria, ya que, de una valoración completa, íntegra y conjunta de las pruebas practicadas, debió conllevar a la conclusión de que se probaron los elementos configurativos de la responsabilidad extracontractual. Que el Juez realizó un juicio de naturaleza especulativa, mágica, futuroológica, adivinatoria, profética y sin soporte en las pruebas, pues concluyó que la presencia de barro en la vía pudo ser causada hipotéticamente por los tractores de la zona.

Dijo que la sentencia carecía de coherencia entre su parte considerativa y resolutive, lo cual constituye en sí mismo una violación al deber de motivar debidamente las decisiones y que haya congruencia entre las partes de la sentencia.

Expresó que se desconoció el precedente judicial y el régimen de responsabilidad e imputación aplicable, que ente caso, por tratarse de una actividad peligrosa, debía analizarse desde la perspectiva de la culpa presunta. Sin embargo, la sentencia apelada resolvió fallar el proceso bajo el régimen de la responsabilidad subjetiva, imponiendo a la víctima de un accidente de tránsito, el deber de haber tomado muestras del material tipo caolín, para luego demostrar de manera irrefutable que el mismo había sido extraído de las canteras de SUMICOL, lo cual resulta imposible.

Por su parte, la apoderada de las sociedades demandadas señaló que, era equivocado el reproche de la parte apelante, en cuanto a que existió incompleta valoración probatoria, toda vez que el Juez de primera instancia sí valoró de manera íntegra, completa y organizada todo el material probatorio que oportuna y legalmente fue arrimado al proceso; que las pruebas en las que se apoyó son conducentes, pertinentes y útiles, las cuales gozan de la veracidad y entidad suficiente para estructurar el fallo emitido.

Advirtió que la parte pretensora no logró acreditar con ninguno de los medios probatorios practicados, la existencia de uno cualquiera de los elementos estructurantes de la responsabilidad civil extracontractual. Además, la prueba testimonial de la parte actora, fue contradictoria, amañada y orientada sin coherencia alguna, a favorecer los intereses del señor Oscar Humberto Cárdenas y su grupo familiar.

Aseveró que el reproche de la parte demandante era tendencioso, amañado y completamente equivocado, porque no se logró acreditar dentro del proceso que el accidente sufrido por Oscar Humberto Cárdenas Gómez, se hubiere originado por la presencia de caolín en la vía, no se probó dentro del proceso que el accidente sufrido por Oscar Humberto Cárdenas Gómez se hubiera ocasionado por la presencia de material sobre la vía llamado “caolín”, no se acreditó qué el supuesto “caolín” que dice la parte actora existía sobre la vía hubiese sido derramado por las empresas demandadas, no existe ni un solo medio de prueba que acredite que, para el día del accidente que volquetas que transportaran material de las empresas demandadas hubieren derramado caolín. Por el contrario, quedó acreditado que las sociedades demandadas

asumen unos costos económicos para que el cuerpo de bomberos limpie la vía, además, que el traslado de material se hace de una manera segura, a través de volquetas que además de ser carpadas, las compuertas cuentan con una palanca de cerramiento absolutamente segura, lo que impide que de las mismas se pueda escapar material alguno.

Indicó que el fallo proferido y que reprocha el apoderado apelante, es completamente ajustado a todo lo que resultó debatido y acreditado dentro del proceso; y si el fallo no estuvo motivado por razones distintas, fue precisamente porque jamás se acreditaron los presupuestos de la responsabilidad civil.

Resaltó que, dentro del proceso, la parte actora tenía la carga de acreditar en primer lugar, que efectivamente el accidente se produjo por la presencia de material arcilloso que había sido arrojado en la vía; y segundo, de acreditarse lo anterior, tenía que probar que dicho material había sido dejado por las sociedades demandadas, lo cual, ninguno de los dos logró acreditar.

El apoderado de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., adujo que la parte demandante no cumplió con la carga de identificar con precisión y detalle cual es el error en la valoración probatoria, y su relevancia, precisando la incidencia del mismo en la construcción de la sentencia que permita destruir su presunción de acierto.

Respecto al motivo de inconformidad denominado por la recurrente como indebida argumentación jurídica, entendida como falta de motivación y congruencia, encontró que esta cumple con lo dispuesto en

el artículo 280 del CGP, que regula el contenido de la sentencia judicial, pues se realizó un examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas.

Dijo que el fallador antes de verificar el régimen de responsabilidad, si es objetivo o subjetivo, si es o no actividad peligrosa, debe encontrar demostrados con certeza el supuesto de hecho, en este caso las circunstancias de modo de ocurrencia del hecho dañoso, y en este caso el demandante no cumplió con esa carga. Además, antes de apoyarse la parte demandante en la presunción de responsabilidad de la actividad peligrosa, debía demostrar que la parte demanda tenía la guarda material y jurídica sobre la estructura y el comportamiento de la supuesta actividad peligrosa, carga probatoria con la que tampoco cumplió.

Arguyó que la parte demandante simplemente se limitó a reiterar las conjeturas planteadas desde el libelo genitor, sin demostrar ningún error en el enjuiciamiento que tenga la aptitud para destruir la presunción de acierto de la sentencia. Realizó apreciaciones subjetivas que no estructuran ni demuestran la responsabilidad civil extracontractual de la parte resistente.

2.0. CONSIDERACIONES.

Sea lo primero consignar que el proceso no adolece de vicios que lleven a su nulidad, por lo cual es viable proveer de fondo.

En segundo lugar, como lo ha venido haciendo esta Sala, la sentencia se emite por escrito por expresa autorización del artículo 14 del decreto 806 de 2020 que así lo dispuso tanto para los procesos que venían en curso como para los cobijados directamente por su vigencia.

2.1. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.

La responsabilidad civil puede ser definida como la consecuencia jurídica en virtud de la cual, quien se ha comportado en forma ilícita debe indemnizar los daños, que con esa conducta ha producido a terceros. Si ese comportamiento ilícito consiste en el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato, nos encontramos ante la RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL. Si, por el contrario, consiste en el incumplimiento de obligaciones legales o cuasicontractuales, o en un delito o cuasidelito o implica la violación de un deber general de prudencia, estaremos frente a una RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.

En general, para que pueda hablarse tanto de responsabilidad civil contractual como de extracontractual, deben satisfacerse cuatro elementos: Una conducta activa u omisiva del demandado; la culpa; que el demandante haya sufrido un perjuicio; y que exista un nexo de causalidad entre la conducta antijurídica y el daño.

En este caso, no hay duda sobre la ocurrencia del hecho y el daño sufrido por los demandantes, por lo cual, cobra importancia determinar si el actor cumplió con su carga probatoria de probar el nexo causal.

DEL NEXO CAUSAL O RELACIÓN DE CAUSALIDAD:

La relación de causalidad, según la HCSJ SC, ha de entenderse no como un acto de mera causalidad natural, sino que para acreditarlo hay que acudir a razonamientos de otra índole, con criterios jurídicos, lógicos y de reglas de experiencia, entre otros.:

“(…)

“Como puede observarse, la fijación del nexo de causalidad es la labor del juez que permite identificar los hechos que revisten verdadera trascendencia normativa y que, posteriormente, harán parte de la premisa menor del silogismo jurídico; por lo que su estudio atañe a circunstancias de facto, es decir a una reconstrucción histórica de los supuestos de hecho que surgen del caudal probatorio recopilado en la actuación.

Ahora bien, para establecer ese nexo de causalidad es preciso acudir a las reglas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de la razonabilidad, pues solo éstos permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con relevancia jurídica que pueda ser razonablemente considerado como la causa del daño generador de responsabilidad civil.

(…)

Esta caracterización del nexo causal supone, además, la interrupción de una cadena de circunstancias cuando en ella intervienen elementos extraños tales como los casos fortuitos o los actos de terceros que tienen la virtualidad suficiente

para erigirse en el hecho generador del daño y, por tanto, excluyente de todos los demás.

(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente **ARIEL SALAZAR RAMÍREZ** Bogotá D. C., catorce de diciembre de dos mil doce. Discutido y aprobado en sesión de catorce de agosto de dos mil doce. **Ref. Exp. 11001-31-03-028-2002-00188-01**”.

El anterior criterio es reiterado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil, SC-23482021 (66001310300420130014101), 16/06/2021, M.P. ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO (reseñada en ámbito jurídico de julio 19 de 2021).

Algunos lo caracterizan como *“la necesaria relación de causa a efecto que debe existir entre la conducta del que está llamado a responder y el daño causado”*¹

Para que el hecho o la omisión de una persona le imponga responsabilidad civil es menester entonces que, entre la conducta del agente y el daño, haya una relación de causalidad, es decir que, éste sea la consecuencia o efecto de ese actuar antijurídico. De lo contrario, el autor del hecho o de la omisión no es responsable del daño sufrido por la víctima.

Las teorías objetivas, radican tal nexo causal en el vínculo que debe existir entre el hecho y el correspondiente daño. Mientras que, en las teorías subjetivas, hacen de la culpa el elemento determinante de la

¹ TESIS, TITULO: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES EN CASO DE CONFLICTO DE INTERESES POR: CLAUDIA APARICIO YAÑEZ Y ADRIANA BOTERO CABRERA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, 1998, Pág. 38.

responsabilidad, por tanto, el nexo de causalidad debe darse entre la culpa y el daño.

Hay relación de causalidad cuando el hecho o la omisión es la causa directa y necesaria del daño, cuando sin él éste no se habría producido. Solo se considera causa del daño, aquel fenómeno sin el cual el daño no se habría producido. Solo pueden estimarse efectos de una causa, aquellos que según las reglas del sentido común y de la experiencia suelen ser su resultado normal.

En conclusión, de lo dicho se tiene que, como norma general, a la víctima le corresponde probar que el daño por ella sufrido es atribuible al comportamiento ilícito del agente, es decir, que este último, por sí mismo o por interpuesta persona, cosa o actividad, causó el perjuicio.

2.2. DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PELIGROSAS.

La responsabilidad civil extracontractual aparece regulada en nuestro sistema jurídico en los artículos 2341 a 2360 del Código Civil.

Estipula el Art. 2341 del Código Civil:

“El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.”

Luego, en los artículos siguientes, se precisa quiénes pueden pedir esta indemnización y quiénes están obligados a pagarla:

“Art. 2342. Puede pedir esta indemnización no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador o el usuario.....”

“Art. 2343. Es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos...”

Dentro de las diferentes fuentes de este tipo de responsabilidad, encontramos la tipificada en el Art. 2356 del Código Sustantivo Civil, según el cual todo el que cause un daño en el ejercicio de una actividad peligrosa, está obligado a indemnizar a la víctima, a menos que establezca una causa extraña.

Como tal entendió nuestra máxima Corporación:

“No hay duda, y esto se ha dicho repetidamente, que poner en actividad ciertas cosas o energías cuya capacidad destructora es incalculable, especialmente cuando sobre ellas se pierda el control que se tenía previsto, comporta comprometer el sosiego social y crear un riesgo que debe asumir quien las pone en actividad, sin que éste pueda replicar en su favor que agotó todos los esfuerzos que le fueron posibles para evitar el daño, pues, reitérase, solamente demostrando fuerza mayor o caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, logra evadir la responsabilidad que se le atribuye.

Desde luego que incontrovertibles mandatos de equidad y justicia imponen deducir que quien - la más de las veces buscando su propio beneficio - cree riesgos o ponga en peligro a los demás, debe asumir la obligación de indemnizar el daño que causa, imputación que se deriva del control que ejerce sobre dicha actividad, esto es el poder de dirección y guarda que de él se predique.

Pero, como su nombre lo indica, trátase del deber de indemnizar los daños causados por la actividad peligrosa, es decir por las cosas o energías que el ser humano pone en acción y que tienen injerencia activa en la causación del perjuicio, no simplemente pasiva o estrictamente incidental, sin proyección alguna en el evento dañoso.”²

Respecto de esta responsabilidad, la doctrina y la jurisprudencia establecieron una presunción de culpa (para otros de responsabilidad), en contra de la parte demandada que liberaba al demandante de tener que acreditarla, quedando sólo a su cargo la demostración del **hecho, el daño y el vínculo de causalidad** entre los elementos anteriores.

Por lo tanto, si el demandado pretende exonerarse de esta presunción de culpabilidad deducida en su contra, está, en general, en la imperiosa obligación de acreditar a lo largo del debate que el perjuicio fue la resultante de **un caso fortuito, de fuerza mayor, o de la concurrencia de un hecho extraño dentro del cual se halla la culpa exclusiva de la víctima.**

² Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de Julio 12 de 2005. M.P. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 7676.

3.0. CASO CONCRETO.

Con el propósito de dar resolución a la alzada, se pasará a estudiar cada una de las inconformidades expresadas por la parte demandante, que fue la única que apeló, para de este modo determinar si el proveído del fallador de primera instancia debe revocarse por haber prosperado los argumentos del recurrente, o si, por el contrario, estos razonamientos no son suficientes para el éxito de la alzada y la sentencia de primera instancia debe ser confirmada.

Lo primero será determinar si dentro del trámite de primera instancia se lograron probar los elementos axiológicos de la responsabilidad civil extracontractual, pues sin ellos no es posible endilgar la misma; esto teniendo en cuenta el argumento del apoderado de la parte demandante, quien señaló que el *a quo* ignoró las pruebas que le daban la razón a los demandantes, para en su lugar tomar únicamente las pruebas que le favorecían a la parte demandada, violando el debido proceso.

Para tal estudio, se debe determinar si existió el hecho ilícito de las demandadas, ocasionado por el derrame de caolín en la carretera donde ocurrió el accidente entre la moto con placas EIV-61B, conducida por OSCAR HUMBERTO CÁRDENAS GÓMEZ y entre el vehículo con placas TNE-138, conducido por LEONARDO FABIO MEJÍA LOPEZ; además se debe determinar si se dio el nexo causal entre la conducta

irregular de la demandada y los daños y perjuicios sufridos por los demandantes.

Si este aspecto es definido de manera positiva, habremos de determinar cuáles son los perjuicios a indemnizar a los demandantes y si prosperan las excepciones formuladas por los demandados, para finalmente arribar al análisis de las obligaciones de ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS S.A., quien fuera vinculada al proceso de forma directa y por llamamiento en garantía, y del señor LEONARDO FABIO MEJÍA LOPEZ, llamado en garantía.

Para atender los argumentos auscultados por la parte demandante, se pasará a analizar la existencia de cada uno de los elementos de la responsabilidad civil, con base en las pruebas que obran en el expediente, haciendo hincapié en aquellas que, de acuerdo con el apelante, fueron ignoradas por el fallador de primera instancia. Veamos:

➤ **LA PRESENCIA DE CAOLÍN EN LA VÍA.**

Dentro del proceso no hay duda de la ocurrencia del accidente de tránsito el día 16 de mayo de 2007, en la vía de Sonsón a la Unión, por el choque de la moto conducida por OSCAR HUMBERTO CÁRDENAS GÓMEZ con la camioneta conducida por LEONARDO FABIO MEJÍA LOPEZ, que de acuerdo a la Resolución 229 de la Inspección Municipal de Policía

y Tránsito de la Unión (Fols. 144 y 145, Cdno Ppal), se dio por la presencia de material suelto (barro) en la calzada, tornándola resbaladiza.

Ahora bien, de acuerdo con la demanda, dicho material era caolín, dejado allí por las volquetas al servicio de las sociedades demandadas; no obstante, el juez de primera instancia consideró que no se logró probar que la sustancia derramada en la carretera fuese caolín. Frente a ello, el abogado de la parte demandante argumentó en la apelación, que con el dictamen pericial se había logrado probar que el elemento derramado en la vía era caolín, pero que el juez había ignorado esta circunstancia.

Durante la contradicción del dictamen pericial, el perito físico JORGE ALBERTO CEBALLOS ROBLEDO, al ser interrogado por la abogada de la parte demandada afirmó entre otras cosas, que con base en la fotografía del accidente que constaba en el expediente, le era posible ver el tipo de material derramado más no la composición química de este. (Minuto 00:05:00 grabación en Cd).

Así, el perito, que entre otras cosas es físico y no químico, determinó que el material era de tipo arcilloso, pero esto no significa que haya sabido con certeza que era caolín, pues el mismo afirmó que podía saber el tipo de material más no su composición química. El experto basó su estudio en la información que constaba en el expediente, por lo que era necesario que tuviera entre sus cálculos la existencia de caolín en la vía, pues con la presencia de este material se reducía el coeficiente de fricción respecto al que se tendría con una vía en condiciones normales. El perito manifestó

que la presencia del material arcilloso en la vía fue lo que probablemente ocasionó el accidente.

De cara al reparo de la parte demandante, hay que decir, por un lado, que el dictamen no se dirigía a determinar el tipo de material en la vía, sino a la velocidad a la cual se podía haber evitado el accidente; de otro lado, el mismo perito acepta que se basó en la prueba documental, específicamente en las fotografías del accidente y las primeras versiones, para llevar a cabo sus cálculos, lo que inevitablemente requería que partiera de la base de que la sustancia en el suelo era caolín, que era lo que se afirmaba en la demanda, no significando aquello que el perito hubiese dicho de manera fehaciente que el material derramado era caolín.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con las demás pruebas, como lo son las declaraciones de OSCAR HUMBERTO CÁRDENAS GÓMEZ, SANDRA MILENA ACEVEDO HOYOS Y LEONARDO FABIO MEJÍA LOPEZ durante el trámite surtido ante el tránsito (Fols 139 a 143, Cdno Ppal), así como de las fotografías tomadas el día del accidente, y de las declaraciones de varios testigos, se constata la presencia de barro en la vía, pero no hay ninguna que dé certeza de que el material era caolín.

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptase que el material arcilloso que reposaba sobre la vía y que causó que el conductor de la moto resbalara, era caolín, se tendría que analizar si existe prueba de que dicho material fue derramado por las sociedades demandadas para que se

cumpla con el requisito del nexo causal que es necesario para predicar la responsabilidad civil de las demandadas.

➤ **NEXO CAUSAL.**

De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el abogado de la parte recurrente, este señala que del acervo probatorio se podía concluir que el derramamiento de caolín en la vía era imputable a las sociedades demandadas, pero que dichas pruebas no habían sido tenidas en cuenta por el juez.

Afirmó, que de los testimonios recibidos se pudo acreditar que las volquetas de las demandadas transitaban por la vía de manera constante, y la teoría de la probabilidad fáctica enseñaba que la causa más probable del accidente la tenían las empresas accionadas, porque eran estas quienes tenían la mayor explotación de caolín, sin que hubiese prueba de que otras empresas explotaban el mineral a mayor escala. Así mismo, aseguró que con los autos donde CORNARE requirió a las demandadas por el derramamiento de caolín sobre la vía, mostraban que aquellas si eran responsables de aquel comportamiento.

Se precisa, que si bien varios testigos dieron cuenta del frecuente tránsito de las volquetas que laboraban para las empresas demandadas en la carretera donde ocurrieron los hechos, también hubo un consenso frente a que aquella vía era transitada diariamente por múltiples vehículos con

diferentes propósitos. Por ello, se examinarán los testimonios que según el apelante fueron ignorados por el Juzgado de primera instancia, para verificar que puede afirmarse, como lo afirma la parte impugnante, que fueron las sociedades demandadas las que dejaron el material en la vía.

JHON HAIVER GALLEGU LONDOÑO, trabajador de MINERALES INDUSTRIALES S.A., indicó que para el año 2007 se producían de 1000 a 2000 toneladas de material, para lo cual se usaban aproximadamente siete volquetas que trabajaban tres días a la semana, realizando cuatro viajes diarios, es decir de ida y regreso, por la carretera de ocurrencia del accidente. (Minuto 02:13:20, grabación en Cd).

Por otro lado, GUILLERMO ALENIS PÉREZ OSORIO, quien trabajaba para MINERALES INDUSTRIALES S.A., manifestó que para el año 2007, se movilizaban mensualmente alrededor de 700 toneladas de material, a través de volquetas contratadas con terceros, y que aproximadamente 10 volquetas realizaban la labor, haciendo tres viajes diarios, es decir, que pasaban alrededor de seis veces por el punto del accidente. (Minuto 02:40:00, grabación en Cd).

RENE HUMBERTO SERNA GÓMEZ, trabajador de SUMICOL, afirmó que, para la época del accidente, las accionadas empleaban alrededor de 14 o 15 volquetas para transportar el material, realizando entre tres y cuatro viajes diarios de acuerdo a la demanda, pasando de manera obligada por el lugar del accidente. (Minuto 03:02:00, grabación en Cd). Ahora bien, aunque es cierto que aquellos testimonios dan cuenta de que las volquetas que llevaban el material explotado por las empresas

demandadas se transportaban de manera continua por la vía donde ocurrieron los hechos, no puede desconocerse que existen múltiples testimonios que acreditan que aquellos no eran los únicos vehículos que se movilizaban en aquella carretera. Veamos:

ALEJANDRO HENAO LOPEZ, conductor de puerta a puerta, quien desde el año 2005, operaba por la vía donde ocurrió el accidente, manifestó que en aquella carretera siempre había mucho barro que era derramado por volquetas, pero dijo no saber de dónde venían aquellas volquetas ya que en la unión había varias empresas, y además expresó que por aquella vía transitaban diferentes vehículos, muchos de ellos transportando productos agrícolas desde Sonsón. (Minuto 00:02:00, grabación en Cd).

JUAN CARLOS PÉREZ ISAZA, conductor, manifiesta que la carretera en mención siempre se encontraba sucia de barro y que por ello había que conducir con precaución, expresando que veía en la vía volquetas, cubiertas y descubiertas, que transportaban barro, pero que el día del accidente no vio ninguna. (Minuto 01:01:00, grabación en Cd).

De esta manera, se comprueba que la presencia de “barro” en la vía, era una constante, por el gran sin número de vehículos que la transitan, por tanto, no puede atribuírsele tal hecho de manera exclusiva a las sociedades demandadas, máxime cuando del material probatorio recaudado, no hay certeza de que las accionadas hayan sido las responsables de derramar el supuesto caolín en la vía el día de la ocurrencia del accidente. Ahora, el hecho de que las demandadas sean

unas de las empresas más grandes que explota dicho material, no es motivo suficiente para endilgarles el accidente, aún más, cuando varias pruebas apuntaron a que en la zona había diferentes concesiones mineras, incluyendo del material denominado “caolín”, y cuando consta que la explotación agrícola también podía generar el derramamiento de material en la carretera, como se pasará a explicar.

La Agencia Nacional de Minería allegó reporte sobre los títulos mineros vigentes en el municipio de la Unión y Sonsón, en el cual se puede evidenciar que las explotaciones mineras en la zona abundan, y entre ellas se puede encontrar al menos seis concesiones para la explotación de caolín. (Fols 454 a 457, Cdno Ppal).

De acuerdo a los argumentos de disenso, encaminadas a que no se logró probar que otras concesiones tuviesen un igual o mayor nivel de explotación de caolín que las demandadas, debe acotarse su imprecisión, pues el testigo JUAN DIEGO MAYA BEODOYA, quien tenía conocimiento sobre la explotación minera de caolín en la zona, por ser el coordinador de zona minera de SUMICOL desde 2007, teniendo entre sus funciones la de planear, programar y diseñar la explotación de caolín y arcilla, expuso que la compañía CEMENTOS ARGOS S.A, quien en efecto contaba con licencia de exploración de caolín vigente (Fol. 455, Cdno Ppal), tenía un nivel de explotación igual o mayor al de las accionadas, y que, obligatoriamente debían pasar por la carretera del accidente, lo que fue corroborado por el testigo GUILLERMO ALENIS PÉREZ OSORIO.

Así mismo, respecto a lo dicho por el demandante, referente a que no se probó que los tractores agrícolas derramaran caolín en la vía, se debe mencionar que según los documentos que reposan en el expediente y los testimonios recibidos en audiencia, es posible deducir la ocurrencia de tales circunstancias.

En el expediente reposa documento allegado por el Ministerio de Agricultura, que indica que para el año 2010, el área sembrada en el municipio de la Unión correspondía a 290 hectáreas; y el área sembrada en el municipio de Sonsón correspondía a 6.295 hectáreas (Fol.580, Cdno Ppal). Esta información da cuenta de la alta explotación agrícola en la zona, que trae con ella la necesidad de transportar los productos, y siendo la carretera donde ocurrió el accidente una vía departamental (Fol. 459, Cdno Ppal), sería lógico inferir que por allí pasaban muchos de los vehículos agrícolas.

Además, el testigo de la parte demandada JUAN DIEGO MAYA BEDOYA, ingeniero geólogo empleado de SUMICOL, aseguró que en la Unión se podía encontrar el caolín en el subsuelo, muchas veces cubierto por una capa de vegetación y ceniza volcánica y otras veces directamente se encontraba en cultivos, por lo que las llantas de los tractores quedaban impregnadas de caolín y lo sacaban a las vías principales, debido a que no tenían muchos controles; agregó, que por lo explicado, las vías destapadas eran de caolín; cuando se hacían exploraciones mineras realizaban perforaciones y sacaban caolín a las vías; cuando se iba a hacer una excavación para construcción se sacaba caolín; y también cuando se ejercía la explotación minera, legal e ilegal, se sacaba aquel

material. Expuso que todas las empresas que explotaban caolín en la zona usaban la carretera donde ocurrió el accidente, puesto que era la única vía que comunicaba a Sonsón con Medellín y el oriente, y por esta pasaban carrotanques de leche, tractores, vehículos que se dirigían a Sonsón, volquetas de la Unión, carros particulares etc. (Minuto 00:51:13, grabación en CD).

Ahora, la declaración de este testigo y de los demás aportados por la parte demandada, fueron tachados por la parte demandante, y en la apelación se solicitó que no fuesen tenidos en cuenta por carecer de imparcialidad en razón a que los deponentes eran trabajadores de las empresas accionadas.

En efecto, cuando se impugna un testimonio, se busca que el administrador de justicia analice bajo las reglas de la sana crítica la imparcialidad de este, por ende, el medio de prueba debe ser valorado con mayor rigurosidad.

Por lo anterior, debe significarse que del análisis de la prueba testimonial de la parte demandada, considera la Sala que los mismos pueden y deben ser tenidos en cuenta, toda vez que dieron cuenta de temas técnicos relevantes para el proceso, ya que se refirieron a los hechos con base en el conocimiento que tenían sobre el funcionamiento interno de las empresas donde trabajan, y poseían información sobre el funcionamiento global de la explotación de caolín en los municipios de la Unión y Sonsón, que podían ilustrar sobre el punto del litigio.

De otro lado, el apelante arguye que el juzgador de primer grado ignoró los documentos en los que CORNARE requirió a las demandadas por el derramamiento de caolín sobre la vía, que daban cuenta de que aquellas si eran responsables de ensuciar la calzada, poniendo en riesgo a las personas que se transportaban por aquel lugar.

Los documentos a los cuales hace referencia el apelante son dos autos expedidos por CORNARE en los cuales se requiere a las sociedades demandadas por haber derramado caolín en la vía. En el auto No. 1310254 del siete de marzo de 2007, la corporación indicó que en el Informe Técnico No. 131-0181 del siete de febrero de 2007, se había concluido que MINERALES INDUSTRIALES LTDA. (con el mismo NIT. De la accionada), había derramado caolín sobre las vías públicas del municipio de la Unión, a causa del invierno y por el mal estado de las compuertas de los vehículos que lo transportaban, señalando que la empresa estaba trabajando para mejorar aquella situación; en mérito de ello requirieron a esta sociedad para que solucionara la caída de caolín sobre la vía que conducía de la Unión a Sonsón y para que limpiara las llantas de las volquetas que salían de las plantas de beneficio. (Fols. 148 y 149 Cdno Ppal).

Del mismo modo, en el auto No. 131-1619 del 13 de noviembre de 2007, CORNARE hizo alusión al Informe Técnico 131-1971 del tres de julio de 2007, que concluyó que la empresa SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A., había contribuido al ensuciamiento en la vía que conducía hacia la vereda las Brisas por el derramamiento de caolín de las volquetas que no contaban con un sistema adecuado de sellado para evitar el derrame, y

por cuanto sus llantas arrastraban el material desde las minas a las vías al no tener sistemas de drenaje adecuados, por lo cual requirió a la sociedad para que solucionara esta problemática. (Fols. 150 a 152, Cdno Ppal).

Si bien es cierto que CORNARE requirió a las demandadas para solucionar el problema de derramamiento de caolín en las vías, ello lo que indica es que tales sociedades en algún momento estuvieron derramando aquel material en la vía, sin embargo, dichos requerimientos no prueban que las demandadas hubiesen sido las responsables del derramamiento de caolín en la vía el día 16 de mayo de 2007, en el sitio donde ocurrió el accidente, pues como se expuso con anterioridad, muchas pudieron ser las causas de la presencia de material en la vía, que tampoco se demostró a ciencia cierta que fuese caolín, sumado a que el auto No. 131-1619 del 13 de noviembre de 2007, fue proferido con fecha posterior a la ocurrencia del accidente.

A lo anterior se adiciona el estudio del testimonio de ARQUÍMEDEZ MEJÍA CARDONA, Comandante del Cuerpo de Bomberos de la Unión, solicitado por el recurrente, del cual no es posible tampoco determinar que el día del accidente se hubiese hecho derramamiento de Caolín por parte de los accionados, pues aunque los bomberos fueron contratados por los mismos para realizar la limpieza de las vías entre tres y cuatro veces por semana, del interrogatorio al deponente no se deduce que ese día preciso del accidente se hubiese presentado el escurrimiento que según los accionantes generaron el impase.

En conclusión, no es cierto lo manifestado por el abogado de la parte demandante en el sustento del recurso de apelación, cuando aseguró que el fallo de primera instancia violaba de facto el debido proceso por haber el *a quo* moldeado la sentencia a favor de los demandados ignorando las pruebas que le daban la razón a los demandantes, pues como se comprobó anteriormente, del análisis conjunto de todas las pruebas aportadas por ambas partes, lleva a la convicción de que no se puede endilgar la responsabilidad del accidente acaecido el 16 de mayo de 2007, a las sociedades demandadas, toda vez que, de un lado no hay un medio que demuestre de manera certera que aquellas produjeron el derramamiento de material en la vía; y de otro, las pruebas analizadas de manera integral muestran que las causas de que hubiese material en la vía pudieron ser muchas, sin que finalmente se supiese cual de todas fue la que ocasionó el siniestro.

Corolario con lo expuesto, es menester confirmar la sentencia proferida en primera instancia, dado que la parte demandante no logró cumplir con la carga de probar la existencia del nexo causal, elemento indispensable para que se pudiese predicar la responsabilidad civil extracontractual de las demandadas, y en virtud de ello, no es necesario continuar con el análisis de los demás elementos de la responsabilidad.

El apelante será condenado en costas, al tenor de lo establecido en el artículo 361 del CGP.

4.0. DECISIÓN.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en Sala Tercera de Decisión Civil, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte motiva, la sentencia proferida por el El JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, en audiencia celebrada el cinco de septiembre de 2016, al interior del proceso verbal de responsabilidad civil promovido por OSCAR HUMBERTO CÁRDENAS GÓMEZ, en nombre propio y en el de sus hijos JHON ANDERSON CÁRDENAS ACEVEDO y CAMILA CÁRDENAS ACEVEDO; SANDRA MILENA ACEVEDO HOYOS, MARÍA REGINA GÓMEZ DE CÁRDENAS, MARIA OLGA HOYOS LOPEZ, SAÚL ACEVEDO ARIAS, NORA ASTRID CÁRDENAS GÓMEZ, VILMA DEL SOCORRO CÁRDENAS GÓMEZ, CARLOS MARIO CÁRDENAS GÓMEZ, LUIS FERNANDO CÁRDENAS GÓMEZ, LILIANA CÁRDENAS GÓMEZ, CLARA INÉS CÁRDENAS GÓMEZ, NORMA CECILIA CÁRDENAS GÓMEZ y JULIAN HORACIO CÁRDENAS GÓMEZ, en contra de SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.(SUMICOL), MINERALES INDUSTRIALES S.A, y ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS S.A., al cual se vinculó LEONARDO FABIO MEJÍA LOPEZ como llamado en garantía.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas causadas en esta instancia, a favor de la parte demandada. Las agencias en derecho serán fijadas en auto de ponente, aparte.

TERCERO: Ejecutoriada la presente decisión devuélvase el expediente a su lugar de origen.

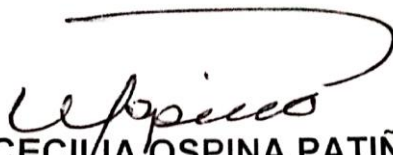
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



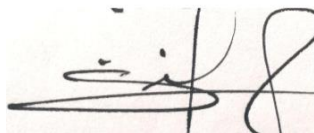
CARLOS ARTURO GUERRA HIGUITA

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín



MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín



JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín